

Calamidad en Guatemala

Las consecuencias por el terremoto de 7,2 grados que azotó el país el 7 de noviembre, apenas comienzan a verse. El presidente, Otto Pérez, declaró estado de calamidad por 30 días.

42

muertos

1,2

millones de damnificados

9

mil viviendas dañadas

156

heridos

Es hasta ahora el sismo más violento en Guatemala desde 1976, cuando un terremoto dejó 23.000 fallecidos.



Internacional

San Andrés: ¿un debate jurídico de espaldas al país?

Las lecciones de una sentencia

El fallo que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitirá el 19 de noviembre en el contencioso marítimo con Nicaragua no será el punto final del proceso, pero sí el punto de partida de varias reflexiones para Colombia.



El proceso con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por el Archipiélago de San Andrés, completa 11 años. La primera evidencia de demanda data de 1979. / Luis Ángel El Espectador

CARLOS SALGAR
ERIC TREMOLADA*

Los procesos ante la Corte Internacional de Justicia son complejos y exacerban los nacionalismos, en particular cuando se discuten derechos o territorios estatales convirtiendo el asunto en una verdadera cuestión de Estado. De ahí que estas líneas pretendan reflexionar sobre cómo el país asumió la controversia con Nicaragua antes de la demanda y durante los 11 años que lleva el proceso ante la Corte, y cómo asumirá la sentencia que se emitirá el próximo 19 de noviembre y que será el punto final al proceso, pero también el punto de partida a la reflexión.

La primera evidencia real de que Nicaragua demandaría a Colombia data de 1979, cuando unos pocos meses después de haberse instaurado la Junta de Reconstrucción Nacional, con una representación

amplia de diversos sectores políticos, se aprobó un decreto por el cual se declaraba la "nulidad e invalidez" del tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y se emitió un "libro blanco" con las reivindicaciones sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre los cayos de Serrana, Roncador y Quitasueño.

En otras palabras, la Junta que presidía el Ortega de hoy, no sólo recogía las gestiones iniciadas por el gobierno del dictador Somoza algunos años antes (frente a las cuales Colombia reaccionó con la intervención de un equipo del que ya hacía parte el excanciller Julio Londoño), sino que iba más allá.

La declaratoria de nulidad del Esguerra-Bárcenas inicialmente fue subestimada por Colombia, hasta que a finales de 1980 se publicó nuestro propio libro blanco sobre el asunto. Los violentos años 80 en Centroamérica y los buenos ofi-

cios de paz de Colombia a través del Grupo de Contadora congelaron las pretensiones.

En 1995 la presidenta Violeta Chamorro tímidamente retomó el asunto en el marco de una conferencia multilateral y en 1999, cuando Honduras ratificó el tratado de límites con Colombia, el presidente Arnoldo Alemán declaró que se terminaban las posibilidades de un acuerdo directo con Colombia y que el caso se llevaría ante la Corte de La Haya, tal como lo hizo el 6 de diciembre de 2001. Es decir, durante estos 21 años Colombia se sintió blindada por el tratado Esguerra-Bárcenas, el cual entendió no sólo vigente, como obviamente lo es, sino que lo consideró perfecto, en cuanto a atribución y delimitación del archipiélago, pese a que su texto se compone de dos artículos y sólo el primero de ellos, de seis renglones, es el que dispone la relación a la soberanía.

En otras palabras, Colombia, citando permanentemente el principio de *pacta sunt servanda* del derecho internacional, en cuanto a que las obligaciones internacionales son para cumplirse, olvidó que el alcance de las mismas depende de lo pactado y que estos acuerdos se interpretan conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos usados y teniendo en cuenta su objeto y fin, incluido preámbulo y anexos. Haber considerado durante más de 30 años que el tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua era perfecto en términos de atribución y delimitación, fue una ingenuidad que quedó patente con el fallo de 2007 sobre las excepciones a la competencia de la Corte que interpuso Colombia.

Por otra parte, los estados sólo están obligados a comparecer ante la Corte si previamente han aceptado su competencia. Colombia lo

había hecho vía la Declaración Unilateral de 1937 y el Pacto Multilateral de Bogotá de 1948; sin embargo, excepcionó que aquella pudiera conocer de la demanda nicaragüense, fundamentado en que el Pacto de Bogotá excluía los asuntos resueltos, esto es, la atribución y delimitación del archipiélago por el Esguerra-Bárcenas.

A su vez, la demanda nicaragüense no sólo discutió la atribución de todo el archipiélago, sino negó que se hubiesen establecido los límites. De esta manera buscaba demostrar que el tratado Esguerra-Bárcenas no había zanjado el debate. En diciembre de 2007 la Corte aceptó parcialmente tanto los argumentos nicaragüenses como los colombianos. Sobre las pretensiones de Colombia, aceptó que el tratado era válido y, en consecuencia, que San Andrés, Providencia y Santa Catalina le pertenecen.